

Cada día, un desaparecido en Cali

A las causas políticas se han sumado factores como delincuencia y tráfico de mujeres y niños. Este año se perdió el rastro de 206 personas. Las autoridades estiman que muchos de ellos habrían sido muertos y arrojados al río Cauca.

Hasta una obra en construcción en el occidente caleño llegaron hombres armados y sacaron a la fuerza a cinco albañiles, al parecer, bajo sospechas de ser los autores del robo a un apartamento vecino. El hecho ocurrió el ocho de septiembre del año pasado.

Hoy, el paradero de Carlos Humberto Gaviria, Aníbal Castro, José Martínez, Yesid Castro y Justiniano N, sigue siendo un misterio.

En la ciudad también se menciona la desaparición de albañiles que sirvieron en la construcción de sótanos y otros espacios camuflados al interior de edificaciones.

Entre tanto, en enero de 1992, en esta capital, desapareció el antropólogo Ennio Vidarte, quien era dirigente del movimiento liberal Nuevo Liderazgo e investigaba la matanza de indígenas en Caloto (Cauca). Al parecer, por ese mismo hecho fueron asesinados el abogado Rodolfo Alvarez y Edgard Torres.

Mientras tanto, en las estrechas y polvorientas calles del Distrito de Aguablanca, en el oriente caleño, y que más parecen un laberinto, se habla de la desaparición hace diez días de cuatro jóvenes evangélicas, entre ellas Soraida Mercado, de 22 años, que el jueves pasado llevaron ayuda a los damnificados de un incendio.

Estos hechos muestran la complejidad de este fenómeno -aún no es un delito- que afecta a distintos sectores de la población. Según el personero municipal, Diego Rojas Girón, de las 354 denuncias registradas hasta la semana pasada, 206 continúan sin esclarecer. Esta cifra se eleva a 398 con el consolidado de años anteriores. Es decir, cada día desaparece una persona en la ciudad. Esos hechos atribuidos en el pasado generalmente a motivos políticos, ahora tienen una multiplicidad de explicaciones.

En la lista hay personas de todas las profesiones y condiciones sociales, y sobre las que no hay ninguna exigencia de orden económico como en los secuestros, advierte Rojas.

Según Rojas Girón, el recorte presupuestal generado por el decreto 1678 de este año llevaría a la desaparición en enero próximo de esa Oficina Permanente de los Derechos Humanos, perdiéndose un espacio donde se concentran los esfuerzos en favor de los desaparecidos.

El director del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Cali (Visicali), Luis Mario Cuervo, aclara que en muchos casos se reportan como desaparecidas a personas que deciden alejarse de sus familiares.

Entre tanto, voceros de organismos de inteligencia señalan que no pocos de los desaparecidos habrían ido a parar al río Cauca.

El balance consolidado desde 1991 hasta junio del 94 reporta 867 desaparecidos, de los que 322 aparecieron vivos, 51 fueron hallados muertos y 415 siguen en averiguatorio. De ellos 518 casos correspondían a adultos, 193 menores y 58 ancianos. En suma eran 540 hombres y 222 mujeres.

Qué pasa

Para el sociólogo Adolfo León Atehortua, en ese fenómeno se expresa la dinámica de la violencia que vive la ciudad y en los que se dan casos no solo por causas políticas sino también por acción del crimen organizado y la delincuencia común.

En el fenómeno de la desaparición política como en décadas anteriores cuando afectó a liberales y conservadores y más recientemente a sectores de izquierda, también hay motivaciones políticas la desaparición y ánimo de exterminio de personas del denominado grupo de alto riesgo como recicladores, homosexuales e indigentes.

También hay creciente desaparición de menores y mujeres. Atehortua anota que en el caso de esos dos sectores de la población está implicado un alto grado de la organización criminal, al parecer, asociada con objetivos rentables como tráfico ilegal de personas. Fernando Jiménez, director de la Fiscalía Seccional, dijo que esa dependencia investiga casos denunciados como secuestros y que, a veces, son desapariciones, planteó Jiménez.

La desaparición política -dice el investigador Atehortua- a veces se camufla dentro de la violencia generalizada y detrás de la desaparición de esos grupos sociales hay toda una concepción política que agencia el crimen organizado y que corresponde a una concepción de ciertas élites.

De todos modos, la impunidad se asocia a las desapariciones. Hasta el momento, esos hechos no son calificados como delitos y sobre el fenómeno no se ha legislado.

Por eso, una mujer cumplió ocho años de búsqueda de su esposo, quien, según ella y una vecina, fue retenido por la Policía y conducido a un calabozo. Sin embargo, allí negaron que hubiera ingresado ese ciudadano. El delito aún no ha sido probado pese a que la Procuraduría elevó pliego de cargos contra cuatro uniformados.

El pasado Gobierno objetó el documento que elevaba a ese carácter esos hechos. La semana pasada se intentó retomar el tema en el Congreso de la República pero no hubo quórum. Mientras tanto, los familiares de Héctor Darío Rincón, un joven cuyo paradero se desconoce desde febrero de 1993, seguirán haciendo innumerables gestiones y no pocas veces viajarán a poblaciones vecinas entre la esperanza y el miedo de constatar que sea el cadáver de Héctor Darío.

En Medellín, menos casos

Colombia ocupa el poco honroso tercer lugar en materia de desapariciones en el mundo. En el Centro Interinstitucional de Personas Desaparecidas en Medellín se han reportado este año 437 casos, de los que 319 personas fueron encontradas vivas, 47 muertas y 107 sin paradero conocido.

Con relación al mismo período del año pasado se presenta una disminución del 16.1 por ciento. Rocío Carmona Salazar, jefe encargada del Departamento de Estudios Criminológicos e Identificación (Decypol), dijo que las causas de estos hechos van desde la desaparición forzada y ajustes de cuentas hasta personas drogadas o viajes inesperados y otros motivos que los familiares no detallan.

En Santander, 55 personas han desaparecido en lo que va corrido del año. El 75 por ciento de los casos se reportaron en Bucaramanga; el 10 por ciento en Barrancabermeja, y el cinco por ciento en Floridablanca.

Según la Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular (Funprocep), el 97 por ciento son hombres entre los 25 y 40 años de edad. Sus profesiones son comerciantes y campesinos.

Sobre los orígenes, se relaciona acciones del Estado, paramilitares y la guerrilla. En Barranquilla, hasta mayo fueron denunciados 112 casos. La Personería local en coordinación con la recién creada oficina del personero delegado para la defensa de los Derechos Humanos realiza una investigación puerta a puerta en las casas de las personas supuestamente desaparecidas para clarificar estos hechos.

Se anota que hasta junio del 93 no había una oficina específica que llevara la estadística y atendiera los casos denunciados.